

Redimensionar la historia: un sindicalismo para lo(a)s trabajadore(a)s y el país

III Congreso Nacional
15 - 17 de noviembre de 1995



Redimensionar la historia: un sindicalismo para lo(a)s trabajadore(a)s y el país

**DISCURSO DEL COMPAÑERO *ORLANDO OBREGÓN SABOGAL*,
PRESIDENTE DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES
-CUT-, EN LA INSTALACIÓN DE SU TERCER CONGRESO
NACIONAL**

BOGOTÁ, 15—17 DE NOVIEMBRE DE 1995



REDIMENSIONAR LA HISTORIA: UN SINDICALISMO PARA LO(A)S TRABAJADORE(A)S Y EL PAIS

Hoy, hace nueve años, nació para lo(a)s trabajadore(a)s y lo(a)s colombiano(a)s, la más importante organización sindical. En los días 15, 16 y 17 de noviembre de 1986, mil quinientos delegados sindicales, con alegre entusiasmo, dejaron atrás la división orgánica que por cuarenta años reinó en el movimiento sindical y abrieron el camino hacia la unidad, construyendo el proyecto más controvertido, más perseguido, pero más anhelado de los trabajadores.

Jamás pensó la sociedad colombiana, que fuéramos los trabajadores quienes forjáramos la unidad en medio de la más amplia diversidad ideológica. *Al país violento le entregamos en ese momento el mejor ejemplo de tolerancia y de civilidad política.* Haber congregado al 60% del sindicalismo en una sigla, en unos ideales, en unos objetivos, se constituyó en el hecho histórico sindical de los últimos tiempos.

Han pasado nueve años. Nueve complejos y difíciles años. La existencia de la CUT se ha visto tan amenazada, que muchos hoy se asombran que aún existamos. Pero es que no *sólo* existimos en medio de las más grandes dificultades, sino que nuestra Central continúa teniendo vigencia, y nos disponemos en estos tres días a renovar la estrategia para asumir mayores responsabilidades, mayor protagonismo y compromiso en asuntos tan importantes, como la vida, la paz, los derechos humanos, y la democracia.

Ha sido una existencia dolorosa por los efectos crueles de la violencia que ha bañado en sangre la esperanza de los colombianos y cegado la vida de centenares de dirigentes sindicales, activistas y trabajadores. Hoy queremos enaltecer la memoria de Alirio Guevara, Oliverio Molina, Luis Carlos Pérez, Guillermo Marín, y de centenares de compañero(a)s que han caído por las balas asesinas encubiertas por la impunidad.

La grandeza de la CUT se manifiesta en que a pesar de que nos han eliminado y desaparecido a valiosos dirigentes, en este día queremos ratificar nuestra decisión de remover la fibra de la nación para lograr la instauración de una sociedad más justa, no excluyente, revestida de paz y democracia política, económica y social.

Así lo querían, y en su honor juramos cumplir con ese ideal, Jaime Aldana y Diógenes Lozano, a quienes inesperadamente la muerte los arrancó de nuestra lucha. Por esos ideales lucharon con nosotros y ahora continúan en otros espacios, Abel Rodríguez, Aida Abella, Angelino Garzón, Jorge Carrillo, Anibal Palacio, Kemel George, y Gerardo González.

Han sido nueve años soportando y confrontando los devastadores efectos de un modelo fundamentado en la política y la filosofía neoliberal, que ha generado más miseria y hambre, más desocupación y exclusión social para la mayoría de la población, y mayor riqueza y opulencia a los dueños del poder económico.

Los embates para destruir la CUT se sintieron a partir de la suscripción del solemne compromiso histórico de unidad del sindicalismo colombiano el 18 de agosto de 1986. No han cesado esas pretensiones, se han intensificado y pese a dificultades internas, las hemos sabido resistir y superar. Hoy podemos afirmar con orgullo al país y al mundo del trabajo, que sólo la voluntad de los trabajadores podrá acabar esta Central, —y eso no será así—, porque nos disponemos en este Congreso a renovar nuestro ideario político sindical que acrecentará el fervor por la CUT en el corazón y en el alma de los trabajadores colombianos.

Este tercer Congreso se reúne en los momentos más aciagos y confusos de nuestra patria. Nos rodea un ambiente de incertidumbre y de escepticismo sobre el presente y el futuro de los colombianos. Pero esta crisis social, política y moral no puede llevarnos a la desesperación. Todo lo contrario. Hoy las organizaciones sociales —y la sociedad civil en general— tienen la oportunidad de no confundirse con la clase dominante para salvar su propia crisis. La tarea consiste en diseñar una estrategia autónoma que vaya más allá de las preocupaciones coyunturales y de las reacciones espontáneas. Más bien se trata de responder con contundencia a las múltiples manifestaciones de violencia que se registran. Proponemos modificar las estructuras económicas y sociales injustas que son la verdadera raíz de los problemas que aquejan a nuestra patria.

El sindicalismo tiene un inmenso reto en la construcción de un futuro justo, en paz y bienestar social para los colombianos. Este tercer Congreso ha sido convocado con el objeto de discutir y evaluar el proyecto sindical en Colombia, bajo el lema de LA VIDA, LA PAZ Y LA DEMOCRACIA. El análisis debe abarcar no sólo la situación nacional, sino también la internacional.

Es bien conocido por el movimiento sindical cómo en los últimos treinta años se ha producido en todo el orbe una serie de profundos e inesperados cambios que nos permiten afirmar que en este período de la historia hubo más transformaciones que antes solo se producían en siglos. Ya no existe el orden mundial bipolar que caracterizó casi todo el siglo XX. La producción se globalizó induciendo cambios en la forma de inserción de las economías nacionales en la mundial. La revolución técnico-científica nos coloca en nuevos umbrales de relación con el conocimiento y la naturaleza.

Los cambios en las relaciones económicas internacionales han debilitado los mecanismos de regulación estatal, magnificando, casi hasta endiosar, la eficacia reguladora del mercado, de la libre competencia individual y del papel de la iniciativa privada. *La individualización como nueva cultura se abrió paso, debilitando la acción colectiva sindical y profundizando las consecuencias sociales del capitalismo salvaje.*

Asimismo, los desarrollos de la revolución técnico-científica afectan el proceso de trabajo y el empleo. Especialmente se impone la desconcentración de la producción que fomenta la formación de redes interempresas y sistemas de subcontrataciones. Proliferan las pequeñas y medianas empresas y se fortalecen las firmas transnacionales. Estos procesos modifican las relaciones entre el trabajador y la empresa, así como entre el trabajador y su sindicato: éste encuentra cada vez más difícil el poder sostener reivindicaciones colectivas para una clase trabajadora cada vez más heterogénea y segmentada. En esas condiciones la acción colectiva se debilita progresivamente al dar paso al manejo individual del conflicto.

Estos cambios nos obligan a revisar las formas de interacción, las modalidades de comportamiento colectivo y de organización sociopolítica. El reto fundamental se encuentra en la capacidad para responder a las nuevas condiciones, de lo cual depende en buena medida su fortaleza en el futuro. No abrigamos la menor duda de que la construcción de una sociedad con buena calidad de vida requiere de la acción de los sindicatos para generar los equilibrios sociales que hagan sustentable el desarrollo. *La participación, la concertación, y la movilización social, son pilares fundamentales para la construcción de una sociedad democrática y para el desarrollo de la competitividad.*

El legado neoliberal

Signado por el neoliberalismo, el gobierno anterior adoptó medidas económicas y laborales obedeciendo a un programa coherente con el modelo imperante que mueve todas las palancas para desatar las fuerzas del mercado, pasando por reducir al mínimo la participación del Estado en estas actividades, dejándolas en manos del sector privado, bajo el supuesto de que éste es más eficiente.

Las premisas económicas sobre las que basó las reformas que dieron impulso al llamado “revolcón”, sacudiendo la estructura del Estado intervencionista, eliminando su papel social, se tradujeron en deterioro de los programas de vivienda, de salud pública, y educación, así como la reducción de subsidios en las tarifas de servicios públicos domiciliarios, aumentando la pobreza y deteriorando la calidad de vida.

Frente a las relaciones del trabajo y al mercado laboral, el modelo neoliberal determinó una flexibilización que significó el deterioro de las relaciones laborales contractuales, de las prestaciones sociales, la reducción de los salarios y la liquidación de la estabilidad laboral. Los recursos destinados al pago de las pensiones se dispusieron para el sector financiero especulativo, dejando incierto el futuro pensional de los colombianos y generando graves costos fiscales al Estado lo que le impedirá cumplir su responsabilidad social. Los servicios de salud entraron a la ola privatizadora, que disminuye los cubrimientos de riesgos y acrecienta los aportes de los trabajadores.

La fuerza laboral desplazada del aparato estatal y del sector formal de la economía se ha reciclado en la economía informal, cuyo trabajo en condiciones de precariedad y sin cubrimiento alguno por la seguridad social, las reduce en su dignidad y aspiraciones de progreso.

Secuela grave del modelo es la profundización de las desigualdades y el incremento de la deuda social. El descontento popular a través de múltiples manifestaciones, ha sido tratado inadecuadamente con la aplicación de mecanismos ilegítimos como la penalización de la lucha social, conllevando expresiones y acciones descalificadoras con consecuencias personales y políticas contra quienes enarbolan banderas sociales y de defensa de los derechos humanos.

La injusta estructura social colombiana y el modelo neoliberal han desarrollado la pobreza, cada vez más profunda, de mayor cobertura, generando consecuencias impredecibles. La miseria es la más grave consecuencia del modelo neoliberal, que defienden en su integridad, y no permiten ninguna revisión algunos de los que desde ya aspiran a la presidencia de la República.

Los estudios sociales detallan la situación de miseria generalizada que vive la región, y se señala una supuesta “subversión de la pobreza” que conlleva el

crecimiento de la “inseguridad” en el continente latinoamericano. *Es preciso reconocer que la masa que sufre el látigo de la miseria es “el detonante político del siglo que termina y el gran interrogante que interpela el futuro de la débil democracia que vivimos”.*

Desarrollo alternativo para el bienestar social de los colombianos

Desde el Congreso fundacional en 1986 la Central Unitaria de Trabajadores, ha tenido la preocupación de elaborar una conceptualización teórica y aplicar alternativas viables sobre el desarrollo social y económico. Los nueve años de existencia de la Central nos han permitido acumular experiencias y reflexionar permanentemente sobre la situación socioeconómica y política, profundizando aquellas variables fundamentales que inciden y pueden hacer factible la propuesta de desarrollo alternativo.

Este esfuerzo colectivo nos indica que el sindicalismo moderno, el sindicalismo de nuevo tipo que estamos proponiendo y construyendo, no puede estar ajeno a los cambios que se están gestando en el mundo y en el país. Afinar nuestros criterios y propuestas de desarrollo social y económico, es uno de los grandes retos del III Congreso de la Central.

El enfoque del desarrollo visto como el incremento del producto interno bruto por habitante

Sigue teniendo importancia la visión tradicional de medir el grado de desarrollo de acuerdo al crecimiento del producto interno bruto *per cápita*; para tal efecto, el aumento de la productividad del trabajo se asume como la respuesta más indicada que permitiría solucionar los problemas de escasez de productos y servicios necesarios para la supervivencia —en comunidad— del ser humano.

El trabajo humano se constituye en el factor fundamental. Por ello se estimula su rendimiento en la producción de bienes y servicios, utilizando tecnología avanzada y nuevas formas de organización y administración empresarial, que garantizan el menor riesgo, esfuerzo y tiempo requeridos para la actividad productiva.

La productividad en sí misma no es el punto en cuestión pues la sociedad cada día requiere avances significativos en esta materia. Estos avances efectivamente se obtienen a través de los nuevos inventos que resultan del desarrollo científico y tecnológico. Es justo reconocer la existencia de enfoques diferentes sobre la distribución de los beneficios de la productividad. Así se constata al evaluar los resultados de los modelos de desarrollo basados en la “libertad

de mercado”, que fomenta la pobreza y concentra la riqueza, olvidando que el ser humano es por excelencia el principal agente de la sociedad y de la actividad económica. Por ende, la creación de riqueza y bienestar social deberían convertirse en dos componentes directamente proporcionales.

Medir el grado de desarrollo por la distribución del producto interno bruto por cada persona —PIB *per cápita*— desvirtúa la realidad social que viven los pueblos; los estudios han mostrado que en ciertos países con ingresos *per cápita* relativamente bajos, sus ciudadanos tienen una esperanza de vida al nacer superior a otros países con ingresos *per cápita* más altos. Por ejemplo, según datos de las Naciones Unidas, en la República Popular China, en el año de 1985, el ingreso *per cápita* era de 310 dólares, su población tenía una esperanza de vida al nacer de 69 años, mientras que en Colombia, con 1.320 dólares de ingreso *per cápita*, la esperanza de vida al nacer era de 65 años.

La inequitativa distribución del ingreso genera la pobreza

Al ubicar la relación directa entre crecimiento y bienestar social se pone de presente que la pobreza resulta de la inequidad en la distribución del ingreso nacional, que impide a unos acceder libremente a los bienes y servicios y a otros les proporciona mucho más de lo que necesitan para vivir.

El modelo de desarrollo sustentado con base en el crecimiento de la productividad viene siendo seriamente cuestionado porque (a) los beneficios de la productividad no se distribuyen de manera equitativa entre los ciudadanos; (b) la miseria se ha ampliado no sólo en los países del sur, sino que se presenta también en los países del norte; (c) la riqueza se concentra cada vez más. Según estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo —PNUD—, el 20% más rico recibe el 82.7% del ingreso, mientras que el 20% más pobre apenas recibe el 1.4%; (d) la expansión sin límite de la “cultura industrial” agudiza el problema ecológico y de medio ambiente, y (e) las personas y colectividades con mayor acceso a las cosas indispensables para vivir, se resisten a compartir una parte de tales bienes y servicios, y tan sólo parecen estar dispuestas a distribuir parte de los incrementos de la productividad.

El desarrollo visto desde la equidad

Al involucrar el componente de equidad como parámetro de desarrollo se avanza en torno a la identificación de la calidad de vida, medida tanto por las necesidades básicas como por los niveles de ingreso de la población.

La relación que se establece entre crecimiento económico y equidad es importante, porque la pobreza aparece claramente asociada a la desigualdad de ingresos y no a la escasez de bienes y servicios.

Buena parte de la desigualdad de ingresos parece estar asociada a la desigualdad de productividades. La mayor o menor equidad en los ingresos de las personas en una economía es resultado de dos procesos básicos: la mayor o menor homogeneidad en la productividad de sus trabajos, y el monto y distribución de las transferencias de ingresos de aquellos que trabajan a aquellos que no trabajan. Esa transferencia se realiza a través del Estado.

En tiempos recientes se introdujeron nuevos elementos al enfoque del desarrollo para hacer referencia a la “expansión de capacidades humanas”, individuales y colectivas. Las capacidades y el desempeño adecuado de las personas se pueden garantizar con la libertad de acceso a las cosas necesarias para vivir.

Esta visión permite vislumbrar las características de las nuevas relaciones sociales de producción que proponemos. En realidad la retribución no sólo debe consistir en dinero o bienes, sino en reconocer —también— derechos por el trabajo realizado, y comprender otros aspectos, tales como: el lugar que ocupa una persona o grupo en la sociedad, su manera de vivir y la actividad productiva que realiza. El principal interés no está en el producto resultante, sino en la realización del trabajador, el despliegue de sus habilidades y otros aspectos sustanciales de la vida en el trabajo.

Nuestra propuesta reúne diversas facetas que van desde el aumento de la productividad para contribuir a la obtención de las bienes tangibles e intangibles que amplían las capacidades de las personas, hasta la posibilidad de vivir con decencia en cualquier nivel de la estructura social, esto es, el derecho humano a gozar de la libertad y de realizarse plenamente como individuos y ciudadano(a)s. Por tanto, la equidad favorece el desempeño de las personas en sociedad y, evidentemente, la satisfacción de las necesidades básicas. *La pobreza es una limitación a la libertad que imposibilita los desempeños posibles de las personas.*

Para infortunio de sociedades como la colombiana, la problemática del desarrollo aún no ha trascendido la esfera de satisfacer las necesidades básicas, a las cuales todo ser humano en principio debe tener derecho; ello presupone hacer el esfuerzo por adoptar un modelo de desarrollo que haga énfasis en el ser humano y sus potencialidades; es decir, en mejorar la calidad de vida y garantizar que la libertad de acceder a los bienes y servicios no se siga convirtiendo en privilegio de los grupos y conglomerados que históricamente han usufructuado la riqueza producida entre todos nosotros.

La alternativa de desarrollo que Colombia requiere

Los modelos de desarrollo puestos en práctica por las clases dirigentes de América Latina y el Caribe, de los cuales Colombia no se ha apartado, han sido un fracaso, profundizando la crisis, la desigualdad y la injusticia social en nuestros países. *La Central seguirá insistiendo en la necesidad de unir esfuer-*

zos para empezar a incursionar nuevas fórmulas de desarrollo socioeconómico, cuyo énfasis sea los hombres y mujeres, y su bienestar social.

Nuestra propuesta de fondo consiste en ofrecer oportunidades similares para aprovechar las potencialidades humanas. Como quiera que no sólo la naturaleza, sino también la historia nos dotan de manera desigual, la sociedad organizada —a través del Estado— debe ofrecer oportunidades equitativas a sus miembros para que se realicen plenamente como seres humanos y como ciudadano(a)s.

Desde que fundamos la CUT, y en los congresos anteriores, las juntas nacionales, y en los pronunciamientos del Comité Ejecutivo, hemos propuesto elementos de discusión para el desarrollo nacional.

El énfasis del Estado debe ser sobre lo social

Los cambios políticos, económicos y sociales que se comenzaron a gestar a finales de la década pasada en el mundo contemporáneo, han dejado sin paradigmas a la gran mayoría de la humanidad: el neoliberalismo económico, cuyos pregoneros vaticinan la superación de la crisis del capitalismo, no ha tenido los resultados esperados; antes, por el contrario, la agudización de la crisis tomó ribetes alarmantes en los propios países industrializados manifestada en los altos índices de desempleo, informalidad, pobreza e indigencia; temas que hoy ocupan la agenda de los organismos internacionales y de los propios gobiernos de los países del norte. Por otra parte, la crisis del llamado “socialismo real” también dejó sin argumentos a los defensores de la economía centralizada, derrumbándose el modelo “ideal” de sociedad y Estado, otrora defendido como alternativa al capitalismo.

Estas nuevas realidades imponen replanteamientos a fondo de las concepciones y prácticas dogmáticas de los modelos de sociedad y Estado, volviendo los estudios y análisis hacia las esferas nacionales y regionales, para dar respuestas a las particularidades del desarrollo de cada país, sin caer en las viejas interpretaciones chovinistas o autárquicas. Para tal efecto, es necesario considerar la importancia del papel que hoy día juega la globalización de la economía, la cultura, la ciencia, la tecnología y la conservación del medio ambiente, como condiciones *sine qua non* para la supervivencia y existencia de la humanidad en el presente y de las generaciones futuras.

Al Estado, en términos generales, ya no se le ubica como neutral ante los acontecimientos sociales y económicos; el papel del Estado está siendo replanteado, de tal manera, que además de sintetizar los conflictos sociales se le impone actuar democrática y activamente en la solución de los mismos.

Desde este punto de vista, el Estado juega un papel mucho más dinámico en la redistribución de la riqueza nacional; por ello, la estatalización *versus* la

libertad absoluta de mercado son consideraciones que los acontecimientos históricos superaron, abriéndose camino la visión de que en la sociedad es factible la relación e interacción de las diversas formas económicas y de propiedad, bajo la dirección de un Estado socialmente democrático y participativo.

Un Estado realmente democrático es aquél que canalice y resuelva las exigencias de la sociedad civil, que intervenga en los asuntos económicos sustanciales, que facilite el acceso democrático a la propiedad de los diversos agentes sociales, que estimule e implemente mecanismos de participación social, que respete y haga respetar los derechos humanos, que promueva la iniciativa y creatividad individuales, así como la socialización del conocimiento y la riqueza nacional y, sobre todo, que sea portador de cambios y renovaciones en los diversos campos del desarrollo humano y social, con fundamentos éticos, morales, eficientes y eficaces, para superar la corrupción, la burocratización y el clientelismo.

El desarrollo en función de la humanidad y la naturaleza

Ciertas élites nacionales, con el respaldo de instituciones financieras internacionales, impusieron sin tener en cuenta el contexto latinoamericano y colombiano, un modelo de desarrollo de contenido neoliberal, que ha profundizado la pobreza y la desigualdad entre nuestros pueblos.

El balance del modelo neoliberal no es satisfactorio para el gobierno que lo implementó con mayor intensidad; las metas de acumulación que se propuso estuvieron lejos de ser cumplidas: el PIB no creció al 6%, la inflación no disminuyó del 22%; el déficit fiscal se mantuvo a pesar de los intentos de recorte del gasto público y la privatización a través de la venta de las empresas rentables del Estado; las exportaciones disminuyeron su dinamismo y las importaciones se ampliaron, trayendo como resultado saldos negativos crecientes en la balanza comercial.

Pero por otro lado, los efectos nocivos del modelo se sienten en el cierre de medianas y pequeñas empresas, desempleo, informalidad, indigencia y pobreza, concentración de la riqueza, bajos salarios, inflación alta a pesar de la ortodoxia monetarista del Banco de la República, y su control por vía de la disminución del gasto público. *La aplicación del modelo neoliberal en Colombia ha profundizado las condiciones para que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres.*

El neoliberalismo hace énfasis en el crecimiento económico y no tiene en cuenta los otros factores que se requieren para garantizar la existencia y convivencia humana. El desarrollo alternativo, que propone la CUT, busca conjugar adecuadamente el crecimiento económico con la distribución de la riqueza, la ejecución de una política industrial como soporte básico del desarrollo nacional con el bienestar social de la población, el respeto a la

naturaleza y la protección del medio ambiente. Es un modelo que sin pretender desconocer la propiedad privada y estatal, pone su énfasis en la economía solidaria y mixta, en donde el Estado participa activamente en la dirección de la economía nacional y cumple con su función social.

El desarrollo alternativo relaciona y complementa los factores internos con la globalización de la economía; la modernización industrial urbana con la modernización del agro; el mercado nacional con el mercado regional e internacional.

El desarrollo nacional y el mercado internacional

La estrategia de desarrollo no puede estar sustentada exclusivamente en los mercados internacionales; el sector externo es vulnerable a los colapsos económicos y financieros, a las medidas proteccionistas de los países industrializados, a los cambios tecnológicos y sustitución de productos primarios y a la baja en los precios de los productos básicos.

Los gobiernos del norte le exigen a los del sur abrir sus mercados, mientras ellos utilizan todo tipo de mecanismos para proteger los suyos; los precios de los bienes producidos en el sur se deterioran cada vez más por decisión de los del norte y de las empresas transnacionales. Colombia había tenido una balanza comercial positiva, pero a raíz de la liberación de nuestros mercados sin ninguna contraprestación, ha variado esta relación en forma negativa, manteniendo déficit comerciales.

Bajo las condiciones de desaceleración mundial, sería un error continuar absolutizando y privilegiando al mercado internacional del norte, sin haber creado y exigido condiciones de simetría, equidad y reciprocidad en los precios de intercambio de bienes. Tampoco se trata de negar la importancia y necesidad de las relaciones comerciales con los países y bloques económicos industrializados; sin embargo, estas relaciones comerciales se deben establecer con prioridad en el plano regional y subregional, en la perspectiva de crear bases sólidas para el proceso de integración.

La integración latinoamericana y caribeña cobra mayor importancia al considerar los factores adversos de las relaciones comerciales en el contexto internacional. La CUT ha propuesto una política integracionista, que supera los acuerdos comerciales y arancelarios que tradicionalmente discuten los gobiernos y empresarios.

Hemos planteado frente a la integración latinoamericana que es necesaria la consolidación y ampliación de los actuales mecanismos de integración y cooperación para que cumplan con el propósito de fortalecer y sentar verdaderas bases para la unidad económica, social, política y cultural de la región.

Hemos considerado importante la realización de acuerdos bilaterales y multilaterales para los intercambios comerciales, procesos productivos complementarios, financiación de programas de inversión productiva, social y conservación ambiental.

Asimismo, reclamamos políticas de intercambio de tecnología, planes de seguridad social para la población, legislación laboral y adopción de una carta social común a los pueblos de la región.

Frente a los diferendos fronterizos exigimos —como amantes de la paz— voluntad política para su solución pacífica, y adopción de programas para la defensa de la soberanía y la autonomía de la región latinoamericana y caribeña.

Frente a la propuesta de la integración comercial hemisférica para el año 2005, presentada en la Cumbre de Miami por el presidente Clinton, los trabajadores alertamos ante el riesgo de que tal estrategia se convierta en una mera ampliación del Tratado de Libre Comercio —TLC—, donde Estados Unidos impuso a Canadá y a México sus condiciones de comercio y de libre inversión sin compensar el costo económico, social, institucional y cultural.

La integración es posible y conveniente siempre que los Estados negocien como iguales, se busque generar empleo, se mejoren las condiciones de trabajo y la calidad de vida de la población, se proteja el medio ambiente, no se instalen industrias contaminantes en el sur, y se respeten las políticas autónomas nacionales de desarrollo, incluyendo la política económica y el fomento a la producción nacional para la generación de valor agregado transable. Mientras no se garanticen estas condiciones es preferible insistir —como lo ordena la Constitución Nacional—, en privilegiar la integración con el resto de América Latina y el Caribe.

Pero hemos advertido enfáticamente que el proceso de integración será mucho más efectivo y real, si verdaderamente cuenta con la participación de los trabajadores y los pueblos de los países de la región.

Fortalecer la industria nacional y la competitividad

Diversos estudios y análisis reconocen las diferencias sustanciales entre nuestra economía y la de los países industrializados en cuanto a productividad, competitividad, eficiencia y calidad; por tal razón, es necesario desarrollar planes y programas tendientes a la renovación y modernización del aparato productivo, que garantice la ampliación de la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la demanda interna, las exigencias del mercado internacional y la generación de empleo.

No se trata de volver a la vieja política proteccionista, que imposibilitó que la industria nacional se adecuara a la competencia interna y externa. Se trata de que el Estado y los empresarios apoyen y estimulen la investigación científi-

co-técnica; que se facilite el acceso al crédito con intereses razonables; que se proporcionen recursos financieros de fomento a la mediana y pequeña empresa, al sector agropecuario y a la economía solidaria; que se establezca un sistema coordinado entre las políticas monetarias y fiscales para desalentar el consumo suntuario de la población con altos ingresos, y estimular el ahorro y la inversión productiva y social.

Está comprobado que nuestros países no fueron preparados para enfrentar la competencia leal o desleal de las transnacionales; por ello *se requiere reorientar la política de apertura indiscriminada, teniendo como objetivos la defensa de la industria y la producción nacional y regional, la modernización del aparato productivo, el desarrollo nacional y la inversión social.*

Las políticas adoptadas para estimular la inversión extranjera han brindado condiciones especiales a las transnacionales para que continúen explotando nuestros recursos naturales e inviertan en aquellos frentes que no generan valor agregado para el país. Aunque consideramos que la inversión extranjera debe estimularse, también se deben aplicar normas regulatorias para no perder autonomía en la definición de las políticas de desarrollo.

Los recursos provenientes del exterior pueden canalizarse teniendo en cuenta la contribución en la generación de empleo nacional, la utilización de insumos nacionales, el grado de participación en las acciones de las sociedades comerciales, financieras y productivas; la competencia con la producción nacional; el tipo de tecnología que se transfiere; el porcentaje de utilidades que se reinvierte en el país y la complementariedad de procesos productivos y de servicios útiles para el país y la región latinoamericana y caribeña.

Desarrollo para mejorar la calidad de vida

El deterioro de la calidad de vida de la población latinoamericana es cada día más alarmante, así se constata a través de algunos indicadores como el de la pobreza que supera la mitad de la población de la región, el desempleo abierto de medio centenar de millones de trabajadores, la informalidad del 60% de la población económicamente activa y la inflación que se registra en los países de la región.

Hemos manifestado que el punto nodal del desarrollo y el bienestar social no puede estar sustentado en los índices de crecimiento del producto interno bruto por habitante —PIB *per cápita*—, como algunos tratan de hacerlo, puesto que a través de ese indicador no se identifica claramente cómo está distribuida realmente la riqueza nacional o regional. Una muestra de ello es que América Latina ha tenido un ritmo de crecimiento promedio del 3.5% en los últimos cuatro años y es en ese mismo período cuando la pobreza y la marginalidad se han acrecentado.

Se acercan un poco más a la realidad del desarrollo social los que toman como parámetro de medición los indicadores sobre necesidades básicas satisfechas

(salud, educación, vivienda, saneamiento ambiental y servicios públicos domiciliarios); no obstante, el concepto de desarrollo queda aún en su fase primaria, al dejar de lado otros componentes como los de la calidad de vida y del trabajo, la democracia y la participación ciudadana.

Colombia ha tenido un crecimiento de la economía superior al 4% promedio anual en los últimos diez años; sin embargo, *este crecimiento no le ha significado a los trabajadores y a las clases populares un mejoramiento en sus condiciones y calidad de vida*. Los indicadores socioeconómicos registrados por entidades oficiales y privadas, así lo demuestran.

La inflación inercial, los niveles de desocupación, la precariedad del empleo, la pobreza, la escasa cobertura de la seguridad social, la carencia y la deficiencia en la prestación de los servicios públicos básicos, la desnutrición y la falta de techo, nos muestran que la riqueza en Colombia está muy mal distribuida. El grado de concentración del ingreso es uno de los más altos en América Latina.

Se ha puesto de presente nuevamente una reforma tributaria, para supuestamente corregir el déficit fiscal. La CUT ha manifestado en la Comisión Central del Pacto Social su rechazo a este nuevo intento de deteriorar —aún más— la capacidad adquisitiva de la población, al incrementarse el impuesto al valor agregado del 14 al 16%. Hemos propuesto otras alternativas frente a la crisis fiscal del Estado. Entre ellas destacamos recortar el gasto militar, controlar la evasión, evitar la impunidad del fraude fiscal, racionalizar el sistema tributario para la generación propia por parte de los municipios, mejorar la eficiencia de las empresas del Estado, reducir la onerosa deuda externa, aumentar los aranceles para los bienes suntuarios y algunos bienes que se producen en el país, cambiar el impuesto de guerra que pagan las empresas por un impuesto social, y utilizar adecuada y racionalmente los ingresos del petróleo y la telefonía celular.

El modelo de desarrollo alternativo que proponemos busca superar las desigualdades y mejorar la calidad de vida de los colombianos. Por ello, consideramos que los recursos del Estado deben estar orientados a privilegiar la inversión social en salud, educación, vivienda, servicios públicos, saneamiento ambiental y empleo productivo. En consecuencia, se deben disminuir los gastos en la alta burocracia, el consumo innecesario, el servicio de la deuda externa y el gasto militar.

Consideramos que para superar la crisis social y económica que vive el país, el nuevo modelo debe contemplar políticas claras que conduzcan a un real mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y el pueblo colombiano.

En síntesis, el desarrollo alternativo que proponemos significa que la nación defina una meta realista y viable para satisfacer las necesidades básicas de toda la población. *Una meta para lograr que los recursos humanos, técnicos y*

financieros que hoy se dedican a especular y a matar, se dediquen a producir bienes y servicios para el bienestar general. Una meta para conciliar el uso del agua, la electricidad, el suelo, la biodiversidad, con los objetivos de progreso económico y las demandas de las nuevas generaciones. En fin, se trata de la construcción de una utopía digna de ejemplo para todos los pueblos del mundo.

Situación política nacional

Es demasiado compleja la situación que vive Colombia. Comprenderla, sobre todo para quienes no viven en esta martirizada tierra, no es fácil. Reconocerla en todo su contexto, requeriría de un amplio espacio de tiempo.

En julio de 1991 se proclamó la nueva Carta Política del país. El Estado Social de Derecho y la participación ciudadana reflejan cambios en el texto constitucional. Fué un cambio constitucional impulsado por el despertar y la participación de la sociedad civil.

Cada vez está más claro que en 1991 se realizó por primera vez en toda la historia del país un gran Pacto en cuya gestación, realización y orientación, participaron fuerzas distintas a las de los partidos tradicionales.

Cuatro años después de promulgada la nueva Constitución Nacional se mantiene la precaria estabilidad política del país, avanzan con lentitud los procesos de participación, la debilidad de las instituciones estatales se mantiene, sin despertar la cabal conciencia acerca de las implicaciones y consecuencias de este factor estructural. Por tanto, continúa avanzando el proceso de fragmentación y disolución nacional. Sectores dominantes insisten en el autoritarismo y en el militarismo como las únicas formas de garantizar el “orden” y contrarrestar los efectos del alto grado de desigualdad social.

Subsiste el monopolio bipartidista y la articulación del régimen está dada todavía por el clientelismo. Esto explica, en gran parte, los altos niveles de corrupción en el sector público.

En el cuatrienio anterior, el ejecutivo al ejercer las amplias facultades de que estaba investido, las empleó para adelantar los programas de reestructuración económica y reforma del Estado en contra de los intereses de las mayorías nacionales.

En la campaña electoral por la presidencia de la República, el actual mandatario de los colombianos propuso al país “poner corazón a la apertura”. Si bien en los primeros meses de su gobierno se proyectaron cambios en varios sentidos, no hay duda que las circunstancias del debate moral y político que afronta desde hace seis meses, no sólo han debilitado el sentido de sus iniciales propuestas, sino que en muchas de ellas se han dado giros regresivos.

Ubicamos posturas que intentan reeditar las viejas y desgastadas fórmulas “frentenacionalistas” que se limitan a pactos desde y para los de arriba entre el partido de gobierno y la oposición para desconocer a la sociedad civil. No es admisible excluir las organizaciones sociales y populares en la formulación de las ideas y de los programas que reclama la nación para sortear la crisis que hoy no tiene visos de solución. Sin la participación de un movimiento democrático de los trabajadores colombianos no será posible llegar al fondo de la problemática nacional y modificar la injusta y desvencijada estructura socioeconómica del país.

La política social integral y estratégica que se anunció el 7 de agosto de 1994 en el acto de posesión del presidente Samper, bautizada como el “Salto Social” y publicitada como el “Tiempo de la gente”, y que según el primer mandatario no iba a ser la cenicienta de la política económica, se modifica ante la presión de sectores proclives a mantener la ortodoxia de las políticas neoliberales. No hay duda que pese a los esfuerzos para lograr una gobernabilidad política y social, el gobierno se ha debilitado, abriendo paso a opiniones reaccionarias. El recorte del gasto público afectando el gasto social, la tributación regresiva del impuesto al valor agregado que castiga el consumo popular, y el aumento del presupuesto militar y del pago de la deuda, no permiten reflexión distinta a la señalada.

Los intentos gubernamentales de “diálogo útil” con los grupos alzados en armas, de negociación en medio de la guerra, y de acuerdos para la aplicación del Protocolo II, han fracasado ante la valoración distorsionada que de las propuestas hicieron las partes en este sangriento conflicto. Esta actitud ha llevado a la inexistencia de una política de paz, para retornar a la incendiaria fórmula de “guerra integral”.

En medio de la barbarie de los violentos, y de los escándalos por la financiación del narcotráfico a la campaña electoral de 1994, el gobierno se encuentra sometido a fuertes presiones de poderosos intereses internos y externos.

Los planteamientos y las medidas del presidente Clinton con ocasión del quincuagésimo aniversario de las Naciones Unidas en relación con el narcotráfico originado en Colombia, así como sus posteriores declaraciones y las de otros altos funcionarios del gobierno norteamericano, indican que bajo la forma de “colaboración” se está avanzando hacia una mayor injerencia en nuestros asuntos internos, sin tomar medidas efectivas para atacar el problema de los altos niveles de consumo interno, y confrontar la protuberante influencia de los responsables del narconeurocio en su propio país.

Concertación con movilización social

La CUT ha considerado que la concertación es un derecho y a la vez un método para la solución de conflictos, cuyo éxito depende en buena parte de la correlación de fuerzas, la capacidad de movilización y los conocimientos que se tengan.

El tripartismo, principio esencial de la Organización Internacional del Trabajo —OIT—, ha sido también una exigencia de los trabajadores del mundo.

Estos dos elementos, concertación y tripartismo, con sus debilidades y carencias, se encuentran en el Pacto de Productividad, Precios y Salarios, que ha logrado romper la inercial inflación del 22%. Frente al Pacto encontramos diversas posturas tanto en el sindicalismo como en la sociedad colombiana. Unos niegan la posibilidad de cualquier forma de concertación, y otros hacen críticas radicales, sin dejar de considerar que se trata de un proceso importante que puede reorientarse para buscar el mejoramiento social de lo(a)s colombiano(a)s.

Este acuerdo se convirtió en un instrumento de lucha de distintos sectores de la población para defender sus intereses en relación con los incrementos en las tarifas de los servicios públicos, de las matrículas escolares y de las rentas de arrendamiento. En muchas ocasiones la ciudadanía hizo respetar los compromisos del Pacto utilizando los procedimientos de participación establecidos en la Constitución.

Es necesario revalidar la necesidad de fortalecer la política de movilización para la concertación hacia un Pacto Social mucho más amplio y más participativo, que vaya más allá de las consideraciones económicas que hoy se han logrado, para que involucre en el análisis y discusión todos aquellos otros aspectos generadores de crisis y desigualdades.

Para 1996 se presentan complejas dificultades que deben ser analizadas y evaluadas en el marco de la discusión. Traemos a colación el incremento del IVA, la sobretasa a la gasolina para Bogotá y su generalización para todo el país, el anuncio de que para mantener las empresas eléctricas se deben aumentar las tarifas por encima de la inflación, son algunos aspectos que hacen difícil un acuerdo. La CUT como política continuará defendiendo el ingreso de los colombianos. Con relación a los servidores del Estado rechazamos la imposición gubernamental de decretar sin concertar el reajuste salarial, y exigiremos la recuperación de la pérdida sufrida en dos puntos porcentuales de sus ingresos. En ese mismo sentido llevaremos a la discusión la recuperación del salario de los trabajadores para compensar el porcentaje inflacionario por encima del 18% para 1995, —que haga perder el 2.5% reconocido por productividad en el reajuste efectuado a finales del año inmediatamente anterior—.

Mantener el espíritu de fortalecer el sindicalismo, con *beligerancia inteligente*, propendiendo por aumentar y mejorar los logros del primer acuerdo tripartito para el desarrollo del sindicalismo, el cual se encuentra en una etapa inicial de cumplimiento. En este mismo sentido procederemos en el aprovechamiento del espacio que creará a partir de 1996 la nueva Comisión Permanente de Concertación Laboral, ordenada por el artículo 56 de la Constitución, que como en el caso de las comisiones de seguimiento a los resultados del Pacto Social también funcionará en las regiones del país.

Pero hay algo que no nos tiene tranquilos, nos inquieta y horroriza pero a la vez nos alerta. Muchas voces del país se escuchan clamando por actitudes autoritarias, proponiendo e impulsando cambios constitucionales o extraconstitucionales encaminados a cercenar los espacios democráticos para la necesaria consolidación de la sociedad civil. *La desestabilización que se pretende va mucho más allá de buscar la caída del gobierno.*

Este Congreso debe formular una propuesta al conjunto de los sectores políticos y sociales progresistas para conformar un Frente por la Democracia en Colombia que impida el regreso de oscuros propósitos fascistas. La CUT como fuerza democrática alentará a la sociedad para construir el auténtico Estado de derecho social, que permita la tolerancia, el pluralismo, y la convivencia ciudadana.

Paz y derechos humanos

La CUT desde su nacimiento ha levantado las banderas de la paz, los derechos humanos y la democracia. En esta lucha el pueblo colombiano y los trabajadores en particular hemos sacrificado valiosos dirigentes. Mil seiscientos sindicalistas entre asesinados y desaparecidos ha sido la cuota trágica puesta por la CUT en los nueve años de su existencia.

Hoy siguen siendo asesinadas en Colombia diez personas diariamente por motivos políticos, reales o presuntos, lo que nos indica que se prolonga ya por más de nueve años la grave crisis que afecta los derechos humanos en el país. *Después del campesinado los sindicalistas constituyen el segundo grupo de víctimas por motivaciones ideopolíticas en Colombia.*

Si tenemos en cuenta que en el país la población sindicalizada se aproxima a 900 mil trabajadores, y desde la creación de la CUT han sido asesinados 1.600 sindicalistas, podemos concluir que aproximadamente un 2% de los integrantes del movimiento de los trabajadores ha sido eliminado violentamente.

Un hecho que genera gran preocupación para el futuro del sindicalismo colombiano, por su repercusión calificada, es el asesinato de integrantes de las juntas directivas sindicales.

Los trabajadores agremiados sindicalmente que laboran en la industria agropecuaria, los educadores y los petroleros han sido en ese orden los subgrupos más afectados por los asesinatos políticos. Las regiones en donde más se ha asesinado integrantes del sindicalismo son: Antioquia, Santander, Cundinamarca, Valle y Meta, repitiendo las circunstancias vividas por los sindicalistas en estos territorios durante la última década. Particularmente dramático es el caso de Urabá, donde durante los últimos años la violencia ha cobrado numerosas víctimas entre los trabajadores y sus familias. En lo que va del presente año han ocurrido, por lo menos, seis grandes masacres, que han dejado cerca de un centenar de trabajadores del banano asesinados.

El drama de los 20 mil desplazados a causa de la violencia nada tiene que envidiar a lo que el mundo está presenciando en la guerra centroamericana. Pero es allí donde los trabajadores sindicalizados en Sintrainagro empiezan a hacer su aporte a la pacificación y al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de la región, mediante la iniciativa de las principales fuerzas de la sociedad civil para buscar un gran acuerdo social que permita contener el militarismo y el paramilitarismo.

Lo que está sucediendo en Urabá, y en el resto del país, nos indica que los colombianos tenemos una tarea histórica inaplazable: la construcción de un verdadero Estado Social de Derecho. *El movimiento sindical colombiano tiene que enmarcar la lucha por la defensa de los intereses de los trabajadores y la lucha por la democracia en un proceso de construcción y reconstrucción de nuestras instituciones políticas fundamentales.* Y esto lo tenemos que hacer a través de los acuerdos y la unidad de acción con todos los sectores sociales y políticos que —de verdad— estén por la convivencia ciudadana, por el desarrollo con justicia social y por el estricto cumplimiento de las normas democráticas.

Desde un principio la CUT ha tenido la decisión de contribuir a la pacificación, esto es, a la negociación política del conflicto interno armado. Con tesis y acciones concretas nos hemos vinculado a los procesos de paz con quienes trabajan el mismo propósito. En reiteradas ocasiones la CUT ha condenado todas las formas de violencia de los grupos insurgentes y de las Fuerzas Armadas. Una vez más llamamos a los propiciadores de la violencia para que respeten los derechos de la población civil y se acojan a las disposiciones que en este sentido consagra el Protocolo II de Ginebra.

La violencia generalizada, en sus distintas formas, constituye la diaria negación de los derechos fundamentales de la población, especialmente de los más humildes, y sigue poniendo en peligro la convivencia ciudadana y la integridad del cuerpo social.

Cada vez estamos más convencidos de que el caos y la violencia perjudican en mayor medida a los más débiles, a los más humildes. Estamos seguros de que los trabajadores y el pueblo colombiano quieren la paz. Todos los días tenemos pruebas de que el conflicto armado interno y todas las demás formas de violencia están impidiendo el desarrollo y el avance de las organizaciones sociales populares. Con sincera vehemencia *estamos planteando la urgencia de que las organizaciones sindicales y sociales ejerzan su plena autonomía para la acción sociopolítica, y delimiten sus fronteras con el gobierno, los partidos, las iglesias, los empresarios, y los grupos armados, y nos dediquemos a impulsar y a fortalecer las formas de lucha democrática, de movilización civil y de concertación social.*

Desde este III Congreso saludamos y valoramos los esfuerzos e iniciativas que —diferentes organizaciones, y en especial la Iglesia Católica—, han realizado para contribuir a la búsqueda de la paz y el respeto de los derechos humanos.

El sindicalismo y su nueva agenda

En las condiciones actuales, nuevos problemas y exigencias se le plantean al movimiento sindical. Si en el pasado su acción se centró básicamente en la defensa del empleo, los ingresos y condiciones de trabajo, hoy es imperativo una visión más global: los sindicatos deben convertirse en voceros del conjunto de los trabajadores, informales o del sector moderno, empleados o desempleados. Debe ser propositivo, abandonar la pasiva posición contestataria para proyectarse como interlocutor en la formulación y definición de objetivos y políticas nacionales.

Es imprescindible avanzar en el desarrollo de una nueva cultura sindical que reconozca en la relación de trabajo un espacio para el conflicto y la tensión, pero también para la complementariedad de intereses. Que haga de la concertación un instrumento de defensa y promoción de los trabajador(a)s, de desarrollo de la competitividad, de aprendizaje, de convivencia en la diferencia, lo que exige un profundo cambio en la mentalidad y en la cultura empresarial, para que la concertación y la democracia también se aclimaten en cada unidad productiva.

No es posible eludir el reto de la calidad, la productividad y la competitividad. Empresa o economía nacional ineficiente y no competitiva no es viable. Hacer la economía colombiana competitiva y eficiente es tarea de todos, en la convicción de que su concreción creará condiciones más favorables en la irrenunciable lucha por mejorar la calidad de vida en esta sociedad, por evitar que los efectos de la globalización profundicen las brechas sociales y se acentúen los procesos de desintegración social.

Para que el sindicalismo pueda responder a las cambiantes condiciones del mundo contemporáneo, a la crisis de representación y de identidad que afronta, deberá ser capaz de encarnar y liderar intereses públicos, de comprometerse en la defensa de los derechos de los ciudadanos, de luchar por las libertades políticas, la justicia económica y la equidad social. En este plano el papel de la dirigencia sindical femenina ha mostrado una indiscutible capacidad de aporte. Es bien importante —además— incorporar a la fuerza sindical a lo(a)s profesionales, a lo(a)s técnicos, a lo(a)s artistas y trabajadore(a)s de la cultura.

No podemos seguir funcionando con doctrinas y estructuras estáticas que no logran responder ágil y eficazmente a una realidad mutante como la actual. Debemos recorrer caminos distintos al meramente economicista y asumir acciones con perspectiva sociopolítica con base en mayores espacios de participación en la empresa, en la definición de los ejes principales de la política económica, y en la comunidad. Debemos propender por la modernización de las relaciones de trabajo mediante la afirmación y ampliación de los derechos sindicales y asegurando la negociación colectiva para todos los trabajadores incluidos los empleados públicos.

Nuestro sindicalismo requiere una estrategia dinámica y creativa, que impulse a nuestra organización como un actor social válido, legítimo y vigente, desarrollando estructuras administrativas eficaces, de planeación estratégica, de dirección gerencial, con capacidad y profesionalización en la conducción de los sindicatos.

El sentido de pertenencia del trabajador con la organización debe ser un manifiesto del compromiso con la práctica cotidiana de la democracia sindical, para no seguir observando el desolado panorama de directivas distantes de sus afiliados. Para ello es necesario ampliar y mejorar la vida democrática de los sindicatos, dando mayor participación, responsabilidad y beneficios a los trabajadores.

En este Congreso se discutirá y decidirá sobre la propuesta de la *votación directa de los afiliados* en la elección de los organismos de dirección de la Central. Es una propuesta innovadora y tal vez compleja, pero seguramente se convertirá en otra de las grandes manifestaciones ejemplares de la CUT a la sociedad colombiana de como responder a las crisis, ampliando y no cerrando, los espacios de participación.

La autonomía y la independencia son principios rectores del sindicalismo y su aplicación debe ser integral. Es necesario consolidar cada vez más una Central de trabajadores y no de sectores partidistas. Asimismo, la actual estructura orgánica del movimiento sindical es inapropiada para enfrentar con éxito los retos del momento. Hoy se requieren menos sindicatos y más

sindicalizados. Todo lo anterior permite reafirmar que necesitamos un sindicalismo del futuro, moderno y beligerantemente inteligente.

La solidaridad sindical internacional

Desde la fundación de la CUT hemos podido contar con la permanente solidaridad de la comunidad internacional, particularmente del movimiento sindical mundial.

Organizaciones internacionales como la CIOSL-ORIT, y centrales nacionales de los diferentes países del mundo, como la de los compañeros que honran y enaltecen este Congreso con su presencia, y otras importantes organizaciones, no sólo han jugado un importante papel en el terreno de la denuncia ante organismos internacionales como la ONU, la OEA, y la OIT, sino que, permanentemente nos han brindado la ayuda solidaria destinada a dar apoyo a las víctimas de la violencia. *Debemos destacar que esta solidaridad ha estado libre de condicionamientos, y se ha producido sin consideración alguna sobre concepciones ideológicas, políticas o de cualquier otra índole. Ello refleja la madurez del sindicalismo y de las organizaciones comprometidas en la defensa de los derechos humanos.*

Al sindicalismo y a las organizaciones no gubernamentales, lo mismo que a la comunidad mundial, debemos señalar que la situación de los derechos humanos sigue siendo muy grave a pesar de las declaraciones del gobierno en este campo. Diversas zonas padecen una situación crítica por la acción de los violentos; azotadas por todos los agentes que en Colombia atentan contra la vida y la tranquilidad de los ciudadanos; Urabá es una muestra palpable de esta dramática situación. Pero también son regiones flageladas por la violación de los derechos humanos: el Magdalena Medio, el Meta, el sur del César, particularmente Aguachica y San Alberto al sur de Bolívar, y el norte de Boyacá. Por estas razones, seguimos invocando la solidaridad, la vigilancia permanente, la denuncia mundial, como forma de salvaguardia de la vida de los dirigentes sindicales y la existencia misma del sindicalismo colombiano.

La solidaridad y la globalización

La globalización supone una interacción funcional de actividades económicas, de bienes y servicios generados por un sistema con muchos centros, en el que pierden importancia los orígenes nacionales de los productos. Pero contra lo que comúnmente se cree, *la globalización no distribuye por igual, no transnacionaliza los beneficios y la riqueza producida. Por el contrario, el modo neoliberal de su realización ha aumentado las brechas sociales entre las naciones y dentro de las naciones.* Por lo menos las tres cuartas partes de los trabajadores latinoamericanos están privados de trabajos estables, se están desmontando los sistemas de seguridad social, y

gran parte de los trabajadores han sido lanzados a la incertidumbre generalizada del trabajo informal.

En estas condiciones, *la respuesta a la globalización y creciente interdependencia de las economías nacionales debe ser la internacionalización de su agenda*. Sin sólidos vínculos a nivel internacional, el sindicalismo no podrá hacer frente a procesos cada vez más internacionalizados.

Hasta ahora la solidaridad internacional ha sido generosa en el ámbito de la defensa de los derechos humanos y democráticos. Pero hay que ampliarla al campo de la transferencia de experiencias para hacer frente positivamente a las nuevas tecnologías, a la defensa del medio ambiente, a la participación en los procesos de integración y a la construcción de la democracia social.

La CUT debe definir su futuro dentro de la comunidad internacional de los trabajadores, participando con la debida independencia crítica, pero desde una posición de estructura orgánica, en la perspectiva real de unidad de clase en un solo organismo internacional, para enfrentar a un solo modelo económico internacional. *La inmensa mayoría de las centrales sindicales nacionales del mundo, con orígenes ideológicos diferentes, ha convergido con sentido pluralista en el enriquecimiento de las tesis económicas, sociales y políticas de la CIOSL-ORIT.*

Será endeble nuestra lucha contra el modelo neoliberal desde una concepción nacional, cuando en verdad lo que soportamos es la presencia salvaje de un modelo económico global, que afecta en similares circunstancias a todos los trabajadores del mundo.

Epílogo

Al declarar instalado el III Congreso Nacional de la CUT no podemos inadvertir la sorpresa que se llevan aquellos que vaticinaban que no llegaríamos a él, o que dentro de sus deliberaciones se produciría el fatal rompimiento de la Central. Eso no va a suceder. Nuestras decisiones enaltecerán una auténtica y real democracia, impregnándola de un espíritu dinámico y renovado hacia la unidad y fortalecimiento del desarrollo sindical, y de una inteligente estrategia como nueva fase en la vida de la CUT. Las diferencias ideológicas o de concepción sindical, serán superadas al priorizar la búsqueda de la consolidación y desarrollo de la unidad y el mejoramiento de la calidad de vida de las mayorías nacionales. *Desterrando la intolerancia y la confrontación estéril interna, y mediante la más vasta coalición de fuerzas sociales para la dignificación de lo(a)s colombiano(a)s, reafirmaremos el propósito de construir una Colombia socialmente justa, económicamente desarrollada, y políticamente libre y soberana.*

**Desterrando la
intolerancia y la
confrontación estéril
interna, y mediante la
más vasta coalición de
fuerzas sociales para la
dignificación de lo(a)s
colombiano(a)s,
reafirmaremos el
propósito de construir
una Colombia
socialmente justa,
económicamente
desarrollada, y
políticamente libre y
soberana.**